

HACIENDA PÚBLICA

LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA PREOCUPA

El Gobierno central quiere abrir una nueva ronda de contactos para tratar de llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas que permita revisar un modelo criticado por todas

POR **JUAN SORIANO**

La reforma del modelo de financiación autonómica vuelve al primer plano de la actualidad. El Ministerio de Hacienda ha anunciado que convocará a cada una de las comunidades autónomas para debatir sobre el nuevo sistema que propuso el Gobierno central a comienzos de este año. La iniciativa ha sido rechazada por el Ejecutivo extremeño, que junto a otras regiones rechaza reuniones por separado y exige un encuentro multilateral en el que tratar de acercar posturas. De lo contrario, considera que se podría beneficiar a comunidades concretas sólo por intereses políticos. De hecho, el modelo propuesto parte de las negociaciones con partidos nacionalistas catalanes.

Extremadura tiene además motivos para oponerse al cambio que se plantea, ya que sería la única comunidad autónoma, junto con Cantabria, que no ganaría recursos con el sistema que el Ministerio de Hacienda quiere aplicar ya en 2027. Además, dependería de mecanismos ajenos al modelo para percibir alguna ganancia.

La regulación sobre la financiación autonómica está pendiente de revisión desde 2014, pero la crisis económica y financiera primero y la pandemia después han retrasado una reforma que genera gran controversia política tanto entre los principales partidos como entre los distintos territo-

rios. Prácticamente todos se quejan tanto del modelo actual como de la nueva propuesta, y eso a pesar de que hay evidentes ganadores y perdedores.

La reforma de Hacienda plantea aportar más recursos para blindar la prestación de los servicios esenciales que corresponden a las comunidades autónomas, como la sanidad y la educación. Era la única forma de tratar de contentar a todas y que nadie saliera perdiendo con la modificación del reparto que contiene el modelo actual, aunque eso supone privar a las arcas estatales de unos recursos que también pueden servir para corregir desigualdades, por ejemplo a través de nuevas infraestructuras.

Junto a esto, el Gobierno central también quiere reducir las diferencias en financiación por habitante que presenta el sistema vigente y tratar de que lo que reciben las regiones se acerque más a lo que aportan. Algo que muchos consideran un ataque al principio de solidaridad.

Para aportar más fondos, el Gobierno propone aumentar la cesión del IRPF (del 50% actual al 55%) y del IVA (del 50 al 56,5%), las dos figuras tributarias que aportan más fondos al sistema. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, con ello la Administración central aportaría 16.000 millones de euros más en 2027. Además, se incluirían en el sistema el

impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios y otros gravámenes que actualmente ya cobran las comunidades autónomas, pero que pasarían a formar parte del sistema de cálculo.

El reparto se haría en función de la población ajustada, un parámetro que pondera el número de habitantes atendiendo a las circunstancias de cada territorio. En el modelo actual ya existe ese término, que lleva por ejemplo a destinar más dinero para sanidad a comunidades con población más envejecida, o más para educación donde hay más niños. Pero Hacienda propone modificar los criterios en vigor. Extremadura sale ganando en algunas cuestiones, como el peso que se concede al número de parados sin prestación o la aportación vinculada a costes fijos de administración. Pero sale perdiendo en otras, como la superficie, que ve reducida su importancia, o por el aumento de financiación para comunidades que acogen a estudiantes universitarios de otros territorios, a pesar de que se pueden ver beneficiadas por el pago de impuestos.

Tras este primer reparto, se llevaría a cabo una corrección para aquellas comunidades que están por debajo de la media. Hacienda estima que en el modelo actual hay una diferencia de 1.500 euros por habitante entre la mejor financiada y la peor. Todos los análisis sitúan a Extremadura en el grupo de las más beneficiadas. El nuevo modelo pretende reducir esa brecha, lo que por tanto perjudicaría a la región.

Con esta corrección todavía habría comunidades que seguirían por debajo de la media. La Administración central sugiere aportar otros 19.000 millones

La reforma propuesta incluye más fondos para las comunidades pero también un nuevo criterio de reparto para evitar las disparidades actuales